



La consulta se refiere a las dificultades que le plantea a la entidad consultante el cumplimiento del deber de información a los afectados acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, impuesto por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. La consultante indica que “tiene una base de datos que alberga información de alrededor de 47000 clientes”, sin indicar el modo en que los datos fueron obtenidos y si fueron facilitados a la consultante por el interesado o los obtuvo de otras fuentes.

El cumplimiento del deber de informar al que se refiere la consultante no es una cuestión novedosa en el presente momento. De hecho, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, vigente desde 14 de enero de 2000 ya impone el deber de informar a los afectados acerca del tratamiento de los datos en el mismo momento en que los citados datos sean recogidos de aquéllos.

Quiere ello decir que cuando los datos se recogen de los afectados el deber de información al afectado no es posterior al tratamiento de sus datos, sino previo, debiendo verificarse en el momento en que el dato es recogido, sin que sea admisible considerar que será posible informar posteriormente a la recogida del dato acerca del tratamiento del mismo.

A mayor abundamiento, esta obligación ya venía establecida en la antigua Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, cuyo artículo 5.1 imponía el citado deber de información en el momento de la recogida de los datos del interesado.

La citada Ley entró en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 31 de enero de 1993. Por ello, la consultante debía haber informado a los afectados acerca del tratamiento de los datos recogidos a partir de dicha fecha, no siendo ahora admisible que se alegue la dificultad de cumplir un deber que debía estar siendo llevado a la práctica desde hace casi dieciséis años.

Incluso en relación con los datos recogidos con anterioridad, la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 5/1992 disponía que “cuando la adaptación de los ficheros automatizados a los principios y derechos establecidos en la presente Ley requiera la adopción de medidas técnicas complejas o el tratamiento de un gran volumen de datos, tales adaptaciones y tratamientos deberán realizarse en el plazo de un año desde la entrada en

vigor de la Ley, sin perjuicio del cumplimiento, en todo lo demás, de las disposiciones de la misma”.

De este modo, debería haberse procedido en el citado plazo, vencido el día 31 de enero de 1994, es decir, hace casi quince años, a informarse a los afectados cuyos datos hubieran sido recabados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1992 del tratamiento de sus datos de carácter personal.

Incluso si los datos no hubieran sido recabados del afectado, el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, en vigor como ya se ha indicado desde 14 de enero de 2000, dispone que “cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo”. Por tanto la consultante debía haber dado cumplimiento a este deber, si los datos no hubieran sido obtenidos del interesado, hace casi nueve años.

Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar y lo señalado expresamente por la consultante en el escrito dirigido a esta Agencia, la citada consultante debía haber cumplido con el deber de informar a los 47000 afectados de los que reconoce tratar datos de carácter sin haber cumplido con este deber hace, según los casos, nueve, quince o dieciséis años, por lo que no parece razonable que se invoque en el presente momento el elevado coste derivado del cumplimiento de una obligación tan largo tiempo pospuesto.

Por otra parte, el deber de información a los afectados de los que se recaben los datos no admite en la Ley Orgánica 15/1999, como no lo admitía en la Ley Orgánica 5/1992, ningún tipo de excepción, por lo que no será en ningún caso posible invocar el elevado coste del cumplimiento de esta obligación que, ya se ha indicado, ha sido pospuesta por la consultante durante períodos sumamente prolongados de tiempo.

Si los datos no han sido recabados de los afectados, ciertamente el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999 prevé que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.4 “cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración

al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias”.

Pero para ello será necesario solicitar la tramitación por esta Agencia del procedimiento previsto en la Sección 1ª del Capítulo VII del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (artículos 153 a 156), disponiendo el artículo 153.2 del citado reglamento que “en el escrito de solicitud, además de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el responsable deberá:

- a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la exención del deber de informar.
- b) Motivar expresamente las causas en que fundamenta la imposibilidad o el carácter desproporcionado del esfuerzo que implicaría el cumplimiento del deber de informar.
- c) Exponer detalladamente las medidas compensatorias que propone realizar en caso de exoneración del cumplimiento del deber de informar.
- d) Aportar una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los términos que se indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del deber de informar”.

Por tanto ni siquiera en ese supuesto lo indicado en la consulta puede resultar suficiente a los efectos de aplicar lo previsto en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, debiendo solicitarse la iniciación del procedimiento referido con los requisitos que acaban de indicarse.

En todo caso, debe señalarse que si la consultante trata los datos habitualmente para la remisión de información acerca de sus productos no sería posible considerar que el esfuerzo para informar a los mismos sea desproporcionado, dado que podría incluirse la adecuada información a los clientes en la siguiente remisión publicitaria que se llevase a cabo.

Por último, debe recordarse que el artículo 18.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “el deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los

datos del afectado”, añadiendo el artículo 18.2 que “el responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte en el que conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento podrá utilizar medios informáticos o telemáticos. En particular podrá proceder al escaneado de la documentación en soporte papel, siempre y cuando se garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de los soportes originales”.

Es cuanto tiene el honor de informar,

Madrid, 7 de enero de 2009.